

Prensa Obrera

POR UN PARTIDO OBRERO



Jueves
21 de mayo
de 2020

Año XXXVII
N° 1.594

\$40
www.po.org.ar
www.prensaobrero.com
prensaobrerapo@gmail.com

Bartolomé Mitre 2162
C1039AAB
Ciudad de Buenos Aires

Editorial

Sacrifican a
los jubilados
a pedido de
BlackRock



MARIANO FERREYRA
LA LUCHA CONTINÚA

OTRO ROBO A LOS JUBILADOS



OTRO REGALO AL FMI

El decreto que establece un 6% de aumento provisional es una flagrante estafa a los jubilados.

No responde a un nuevo cálculo de movilidad votado en el Congreso, como comprometió la ley en diciembre. Está incluso por detrás del repudiado decreto de febrero, que sumaba un plus a las jubilaciones mínimas, para evitar "privilegios".

Ahora todos reciben el mismo porcentaje pobrísimo. El aumento deja a la jubilación mínima en 16.800 pesos. Un tercio de la canasta de jubilados.

A la basura con el derecho adquirido de la movilidad sobre la inflación del año pasado.

El enorme ajuste no puede separarse de los

millones de dólares que el gobierno está prometiendo a los bonistas. Al contrario, es una señal para ellos.

Los propios fondos de la Anses son usados para subsidiar empresas enormes, incluso multinacionales.

La plata que se les niega a los jubilados se la llevan los Techint, McDonald's e incluso los dueños de los casinos. Las cajas jubilatorias provinciales son otro chanchito que los gobernadores sacrifican en el altar de la deuda externa. Schiaretti va por la armonización a la baja y Kicillof ha dado pasos en el mismo sentido.

El kirchnerismo guitarrea con un impuesto a las grandes fortunas, pero regala los fondos públi-

cos a las mismas patronales que realizan los despidos y suspensiones con rebajas salariales.

El rescate de los usureros y el saqueo a los jubilados tuvo el acuerdo de todos los gobernadores, la CGT y la UIA.

Las mismas fuerzas que acordaron la rebaja salarial general del 25%.

No hay cuarentena con hambre y sin salario. A esta política la derrotamos los trabajadores.

Apoyando las luchas que se extienden por todo el país. Superando el freno y el entreguismo de la burocracia sindical. Contra el aprovechamiento patronal de la pandemia.

Para que la crisis la paguen los capitalistas, por una salida de los trabajadores.

El poncho (impuesto a las fortunas) no aparece

Llevemos la campaña por el proyecto del Frente de Izquierda a todas las organizaciones populares

El kirchnerismo ha hecho una bandera nac&pop del llamado impuesto a la riqueza, pero el poncho no aparece. No fue parte de las sesiones del Senado y de Diputados, y en el demagógico discurso de Máximo Kirchner en el cierre del debate tampoco hubo detalle alguno.

El tema no es menor porque en el mientras tanto todavía no cobraron la IFE la totalidad de las 8 millones de personas aceptadas, algo que ocurriría recién el 9 de junio. Ya sabemos que las camas con respiradores no superan las 10.000, y el personal de salud sigue protagonizando reclamos por elementos de seguridad sanitaria que faltan. Obras públicas esenciales de agua y vivienda requieren enormes fondos. El Estado debería garantizar el cobro de los salarios de todos los trabajadores, abriendo las cuentas de las empresas a la vista de los trabajadores, para pagarlos cuando no hay más remedio. Los jubilados tendrían que recibir la compensación del robo sufrido en marzo y en su lugar sufrieron otro mazazo a sus ingresos devorados por la inflación. Los alimentos no llegan a los comedores comunitarios en la magnitud ni el contenido nece-

sarios, cuando todos los días aumentan los comensales.

El pequeño listado demuestra el dramatismo de algunas de las urgencias. El Congreso fue cerrado dos meses y abrió para ser la mera escribanía de reafirmación de los DNU del Presidente. En cambio, a mano alzada, sin nominalidad ni debate, Sergio Massa hizo votar en contra el tratamiento del proyecto del FIT de impuesto progresivo a las grandes rentas y fortunas.

Lo que encubren el gobierno y el kirchnerismo, que hace demagogia con un proyecto de impuesto que no llega, es que esperan el desenlace de la negociación de la deuda, el 22 de mayo, para no incomodar a los bonistas sobre el curso del plan económico futuro. Algunos de los afectados por un impuesto de este tipo son, naturalmente, tenedores de los bonos en reestructuración. Tampoco se sabe si el proyecto que viene gravará los bonos en manos de los especuladores, bonito tema que, muy probablemente, sea motivo de negociación con los propios especuladores que tendrían que ser gravados.

Estos motivos de la demora pintan un régimen incorregible en su subordinación al capital financiero

y los grupos económicos. Porque, además, en la medida que se sigan pagando -o refinanciando- los bonos en pesos- que hasta fin de año suman la montaña de 800 mil millones, el importe del impuesto, cualquiera sea, se va por el resumiendo de la deuda. Aún cuando formalmente se establezca que tiene otro destino. Porque lo que no se usa para una cosa, se usa para la otra.

Con todo, conviene saber de qué impuesto estaríamos discutiendo. El texto estaría listo, aunque tiene que pasar por la aprobación de Martín Guzmán y de Alberto Fernández. Se trata de una tasa del 2% sobre fortunas de entre 200 y 400 millones de pesos, hasta alcanzar una tasa del 3,5% para aquellas mayores a 3.000 millones.

La Afip ha hecho trascender que se trata de unos 12.000 contribuyentes. Si el promedio de esas fortunas fuera unos 500 millones de pesos, a una tasa del 2,5%, estaríamos ante una recaudación de unos 2 mil millones de dólares, apenas la cuota pendiente con el Club de París. Una gota en el océano de la quiebra argentina.

El proyecto del Frente de Izquierda, cuyo tratamiento rechazó la "unidad nacional" del Frente de Todos y Juntos por el Cambio

a mano alzada, en cambio, es un verdadero impuesto progresivo a las grandes rentas y fortunas, a los bancos, a la propiedad terrateniente y a las propiedades ociosas.

Su alícuota arranca en el 5% para las ganancias mayores a 65 millones de pesos, plantea como piso patrimonial para personas humanas los 100 millones de pesos, con alícuotas progresivas e impuestos especiales y progresivos a las ganancias bancarias, a las altas rentas, a la gran propiedad de la tierra a partir de las 5.000 hectáreas y a las viviendas ociosas. De esta manera, se recaudarían entre 15 y 20 mil millones de dólares, que deben destinarse a un fondo especial de emergencia, con un comité de monitoreo del mismo, compuesto por trabajadores de la salud, del Instituto Nacional de la Vivienda, de la Afip y técnicos de universidades públicas para garantizar el reforzamiento del sistema sanitario, un seguro al desocupado de 30.000 pesos y un plan de vivienda, y se excluya utilizar esos fondos para el pago de la deuda.

¿El proyecto agota la cuestión de un plan económico y social de lucha contra la pandemia sanitaria y económica de la Argentina? Por supuesto que no, pero es un gran

puntapié en el debate de salida a la crisis. Se trata de un planteo que tiene que formar parte de un paquete que incluye el no pago de la deuda, la nacionalización del sistema bancario, del comercio exterior, así como de todos los recursos estratégicos, empezando por los hidrocarburos, minería y energía eléctrica. Es parte de un planteo de reorganización económica y social integral desde el campo de los trabajadores, que incluye la centralización de todo el sistema de salud en manos del Estado y bajo control de los propios trabajadores de la salud.

Casi 500 intelectuales, docentes universitarios y artistas han reunido unas primeras firmas de apoyo al proyecto, reivindicando su asociación al no pago de la deuda. Vamos por una campaña masiva de pronunciamientos en todo el movimiento obrero y popular.

Por eso, ante el freno del gobierno, pongamos proa a una gran campaña en todo el movimiento popular por el proyecto del FIT. Ya está en desarrollo una campaña en la universidad, llevemos el debate a todas las organizaciones obreras y populares.

Néstor Pitrola

Schiaretti les roba a cien mil jubilados

Además modificó el régimen previsional

El gobierno de Juan Schiaretti ha perpetrado el robo más grande de la historia contra más de 100 mil jubilados y pensionados cordobeses. La ley aprobada en la Legislatura este miércoles incluye todos los ataques que perpetraron los gobiernos provinciales anteriores: el del radical Ramón Bautista Mestre y el de José Manuel De la Sota, y también los que impulsó el propio Schiaretti junto a Cristina Kirchner durante 2008, en la búsqueda de la "armonización" con el régimen nacional, lo que implica una baja.

La aprobación de la ley tuvo el apoyo decidido de los legisladores que responden al presidente Alberto Fernández, lo que implica que el robo fue consensuado con el gobierno nacional. Tal cual ladrones que son, los legisladores de Schiaretti-Fernández se movieron en forma alevosa, aprovechando la marcha atrás en la flexibilización de la cuarentena, y no

presentando el proyecto del robo hasta un par de horas antes de la sesión. Incluso en el medio de la sesión le siguieron haciendo modificaciones.

El núcleo de la reforma jubilatoria es la equiparación, para abajo, con el régimen de jubilaciones nacional, que impulsó el menemismo y que mantuvieron y agravaron todos los gobiernos hasta la actualidad. Se recorta el haber jubilatorio y las pensiones por todos los costados.

Entre las medidas importantes cabe mencionar que se impone un recorte directo en las jubilaciones por medio de la modificación del cálculo inicial. Hasta el momento se calculaba el 82% móvil del 89% del salario, lo que arrojaba un 73%. Ahora se calcula el 82% de una suma igual al bruto deducido el aporte personal jubilatorio; lo que significa, en muchos sectores, un recorte directo del 6%. Asimismo, se mo-

difica la base salarial del cálculo inicial, pasando a un promedio de los últimos diez años, en sintonía con el cálculo de la Anses. De esa forma también se avanza en el desenganche del cargo en actividad, lo que imposibilita luego una actualización permanente de los haberes. También se achica la base del cálculo porque no tomarán como parte del salario viáticos, premios y otros ítems salariales. Esto afecta, sobre todo, a los futuros jubilados y también abre el camino para una reducción proporcional del salario "limpio" (sin premios ni otros adicionales).

Además se posterga la aplicación a los jubilados de los aumentos que perciben los activos por dos meses, se recortan aún más las pensiones y también se podan las jubilaciones por "invalidez" al 45% y por "edad avanzada" al 60%. En el caso de estas últimas se eleva la edad mínima de 65 a 70 años

para acceder al beneficio. Todo lo anterior se aplica a los regímenes especiales; es decir, se avanza como nunca sobre la docencia y otros sectores que habían logrado mantener ciertos derechos, no obstante, la reforma menemista de los '90.

El robo contó con la complicidad de la burocracia sindical. José Pihen, secretario general de la CGT y del SEP (estatales) y a la vez legislador de la bancada oficial, se limitó a votar a contra en el recinto, pero no movió un dedo en las calles. Hace tiempo, las conducciones del SEP y de UEPC (docentes) vienen colaborando con el desfinanciamiento de la Caja, haciendo pasar rebajas de los aportes personales como aumentos salariales, y admitiendo el trabajo precario y la reducción de los aportes patronales.

En las calles, la única manifestación la desarrollaron los luchadores del Frente de Izquierda y de

la Coordinadora Sindical Clasista. En el recinto defendimos enérgicamente el programa de las y los trabajadores denunciando al gobierno de Schiaretti y los legisladores como verdaderos "ladrones" al servicio del capital.

Hay que organizar la coordinación de todos los sindicatos involucrados y lanzar un plan de lucha.

La CGT debe convocar al paro general. Desde el Frente de Izquierda defendemos un programa de las y los trabajadores para resguardar la Caja de Jubilaciones: terminar con el trabajo precarizado y en negro, reponer aportes patronales, eliminar jubilaciones de privilegios de funcionarios, retomar el control de la Caja mediante un directorio electo y revocable, reponer el 82% móvil y dejar de pagar la deuda usuraria.

Soledad Díaz García, legisladora del Frente de Izquierda



Sacrifican a los jubilados a pedido de BlackRock

GABRIEL SOLANO

Mientras los especuladores festejaban por anticipado un arreglo de la deuda en los términos dictados por los fondos de inversión internacionales, el gobierno emitía un decreto que recortaba nuevamente el aumento que debían recibir los jubilados. La suba de la cotización de los bonos y de las acciones de las principales empresas del país contrastaba con lo que será un nuevo golpe a las jubilaciones. La relación entre un hecho y otro es más estrecha de lo que parece. Los BlackRock y compañía enfocan su reclamo en lo que será el “valor presente” que tengan los bonos reestructurados al momento que comience su circulación. El mismo depende de una serie de factores, entre ellos de la capacidad de repago que se le atribuya al país. Por ello, se estima que mientras menor sea la actualización de las jubilaciones mayor será la capacidad de pago de deuda de la Argentina. Finalmente, todos sabemos que el FMI tiene entre sus exigencias fundamentales la imposición de reformas previsionales que reduzcan los haberes, tendiendo a convertirlos en un régimen asistencial a la vejez. La nueva titular del Fondo, Kristalina Georgieva, amiga de Alberto Fernández y del Papa, no ha cambiado un ápice este decálogo de principios del gran capital internacional.

El nuevo decretazo contra los jubilados implica una violación de la ley votada en diciembre pasado, que comprometía al Congreso a votar una nueva fórmula de movilidad previsional. Nada de esto se ha hecho, está claro. Pero bien visto, este decreto es aún peor que el emitido en febrero/marzo pasado. En aquella oportunidad se impuso un porcentaje de aumento más una suma fija para las jubilaciones mínimas. En esta oportunidad, esa suma fija desapareció. Se pasó así del discurso de “beneficiar a los que menos tienen” al ‘igualitarismo’ basado en un ajuste generalizado. Mientras la ley de movilidad suspendida preveía un aumento en junio del 10,9%, el decretazo del gobierno redujo ese porcentaje al 6,12%. Para los millones de jubilados que cobran la mínima, el aumento será de apenas 972 pesos mensuales o 32 diarios. El haber mínimo quedará establecido en 16.864 pesos, que no cubre siquiera el 50% de la canasta básica del jubilado que mide la Defensoría de la Tercera Edad; al contrario, está más cerca de ser la tercera parte. El argumento, usado a modo de consuelo, de que al menos el porcentaje del aumento supera la inflación del período, tampoco debe ser tomado como cierto. Sucede que la inflación de la canasta del jubilado difiere del índice inflacionario general. Por lo pronto, la inflación en los alimentos duplica en abril el promedio general. Esto afecta a todos los sectores de menores ingresos, entre ellos los jubilados, porque son quienes destinan la mayor cantidad de su ingreso a la compra de alimentos.

A este ataque se suma la reforma del sis-

tema jubilatorio en Córdoba, que se está votando al momento de escribir este editorial, se trata de la completa armonización a la baja con el sistema nacional. Este es el camino que se pretende para el conjunto de las 13 provincias que mantienen regímenes propios -entre ellas, la de Buenos Aires.

El ajuste contra los jubilados se ha transformado en la piedra basal de toda la política del gobierno y de la clase capitalista. Mientras a los jubilados se les otorga un aumento bochornoso de 32 pesos diarios, los fondos de la Anses son utilizados sin descaro para asistir a los principales grupos empresariales del país. La difusión de esta información ha creado un verdadero escándalo político. Y, digámoslo con todas las letras: al frente de esta estafa a los jubilados está el kirchnerismo más rancio con Raverta y Volnovich a la cabeza. Ante esto, el ‘ala izquierda del kirchnerismo’ ha decidido salir a la cancha para jugar el papel que tiene asignado: confundir a la población trabajadora y progresista. Esta es la función que juega la versión puesta a circular de que la diputada K Fernanda Vallejos presentaría un proyecto para que la Anses se quede con parte del paquete accionario de las empresas que reciben asistencia del Estado. Por eso, aunque el proyecto aún no existe y nadie sabe si alguna vez existirá, es necesario señalar que una propuesta de este tipo está lejos de afectar realmente a los capitalistas. De hecho, luego de la estatización de las AFPJ’s, el Estado se convirtió en accionista de muchas empresas y hasta designó directores en éstas, entre ellas algunas grande como Clarín, Techint o Aluar. Sin embargo, esos directores no cambiaron la naturaleza de esas empresas ni modificaron las condiciones de sus trabajadores. Al revés, reforzaron la asociación entre el Estado y el capital en la explotación de esos trabajadores.

Aunque en Diputados no hay ni rastros ni perspectivas de proyecto alguno en ese sentido, no hay que descartar que se lo active en vistas a promover un rescate, si hiciera falta, de mayores dimensiones del capital en crisis, al cual se lo disfrazará como un avance “nacional y popular”. Una transformación de la Anses requiere un replanteo social general, que comience con la defensa del 82% móvil, la reposición de los aportes patronales a los niveles de 1993, la eliminación del trabajo en negro y la administración de la caja previsional por trabajadores y jubilados. Dicho de otro modo, hace décadas que los trabajadores financian a los capitalistas a través de la liquidación sistemática de su régimen de jubilaciones.

El permanente saqueo de la Anses por parte del capital es una expresión de una bancarota económica de fondo, que muestra que la economía argentina carece de todo tipo de financiamiento, a no ser la emisión vil de moneda. La tentativa de superar esa falta de financiamiento, recurriendo a un impuesto al gran capital, no pasa, por el momento, de una amenaza o una maniobra de distracción. Según comentaron varios perio-

distas especializados, fue el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, quien solicitó que no se presente ningún proyecto de este tipo hasta que no concluya la renegociación de la deuda. Sucede que muchos bonistas reclamarían que el gobierno reconozca una porción mayor de la deuda si son alcanzados por un nuevo tributo. Sea como sea, la negociación de la reestructuración de la deuda se alargará durante todo junio y solo queda saber hasta dónde reculará el gobierno. Como la propuesta original ya implicaba de por sí un recale, reconociendo el 95% de capital adeudado y una tasa de interés muy superior a la media internacional, un nuevo retroceso del gobierno equivaldrá a un triunfo en toda la línea de los fondos de inversión. En el ínterin, en vez de impuestos al capital para asistir a los que menos tienen, tenemos un subsidio al capital con los fondos de los jubilados. Entretanto, los “mercados” no se privarán de seguir apelando a la fuga de capitales y la corrida hacia el dólar, de modo de condicionar aún más la renegociación de la deuda.

Otra vez, que la crisis la paguen los capitalistas

Otra vez, luchemos por el control popular de la cuarentena

Esta distancia entre los dichos y los hechos se aplica también a la cuarentena. Alberto Fernández ha dicho una y otra vez que no le doblarán el brazo para abrir la economía, pero es exactamente lo que está haciendo. Ahora, esta duplicidad la copia Axel Kicillof. Mientras cuestiona la apertura comercial de Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, acaba de resolver una apertura aún de dimensiones más importantes en la provincia de Buenos Aires, bajo la presión directa de la burguesía industrial y el capital agrario. En la letra chica, como siempre, está la trampa. Es probable que detrás de la extensión de la cuarentena hasta el 8 de junio, que se descuenta anunciará Alberto Fernández, se habiliten la apertura de nuevos sectores empresariales. Sin embargo, el aumento de los casos en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires debiera alcanzar para poner en alarma a toda la población. La crisis sanitaria que ya abarca a la mayoría de los países de la región podría desatarse en la Argentina. Los 1.000 muertos diarios en Brasil y el colapso del sistema de salud en Chile y Perú, que ya está llegando al punto crítico de “la última cama”, prueban a dónde termina la apertura de la actividad en países azotados por la pobreza, con sistemas de salud desfinanciados y muy precaria estructura del transporte público.

El decretazo que redujo el índice de actualización de las jubilaciones tiene su correlato en el pacto CGT-UIA-gobierno, que estableció un recorte nominal del salario del 25%. Esta reducción, realizada en nombre de la defensa de los puestos de trabajo, no ha paralizado los despidos que afectan cada vez a sectores más amplios de los trabajadores. Lo que sucede con Techint es un

botón de muestra de esta situación. El monopolio que comanda Paolo Roca no solo recortó salarios a sus trabajadores, sino que se benefició con la asistencia de la Anses mientras continúa con su política de despidos y flexibilización laboral en distintas plantas y áreas de la empresa. Desde luego, violentando en muchos puntos los protocolos necesarios de distanciamiento social y protección frente al virus. La invocación a la cuarentena, para llevar adelante estas fechorías, oculta que la crisis es precedente al coronavirus, como lo prueba que las suspensiones y la caída de la producción y de las ventas se habían profundizado en enero y febrero. La reactivación de la que hablan los capitalistas no llegará a la Argentina ni a la economía capitalista mundial. El reclamo de la apertura de la cuarentena no persigue un fin reactivador sino llevar adelante una ofensiva en regla para modificar sustancialmente las relaciones de fuerza entre el capital y el trabajo, aprovechando la depresión económica en desarrollo, nacional y mundial.

Como en toda crisis, la cuestión de fondo es quién la paga y qué clase social ofrece una salida en función de la mayoría nacional. Con Alberto Fernández, Larreta y compañía, la están pagando los trabajadores, con despidos, suspensiones, rebajas salariales y mayor confiscación de los jubilados. El Partido Obrero y el Frente de Izquierda plantean la línea opuesta: que la crisis la paguen los capitalistas. Esto supone establecer el no pago de la deuda, la nacionalización del sistema financiero y del comercio exterior. Imponer un impuesto progresivo al capital y eliminar los impuestos al salario y al consumo. Prohibir los despidos y las suspensiones, estableciendo el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, que debe mantener su capacidad adquisitiva ajustándose por inflación. Defender la Anses, reponiendo los impuestos patronales y su control y gestión por parte de los trabajadores y jubilados. La crisis sanitaria requiere el control obrero y popular de la cuarentena, en los lugares de trabajo y en las barriadas populares. La vida de nuestro pueblo no puede estar a merced de las ganancias y la desidia del capital y sus gobiernos.

Sobre esta base llamamos a los trabajadores a deliberar y organizarse. Destacamos la lucha dada por el Sutna, que logró el pago del 100% del salario en clara oposición al pacto UIA-CGT-gobierno, al igual que Morvillo. Ante la huelga de más de diez días del transporte en grandes ciudades del país, como Rosario y Córdoba, planteamos que los trabajadores se organicen para mandatar a delegados y seccionales mediante asambleas, de modo que la salida sea reconociendo la integralidad del salario y su actualización: ninguna confianza en la burocracia de la UTA. Son ejemplos que marcan la importancia estratégica de la recuperación de los sindicatos como órganos de lucha de los trabajadores contra la patronal y el Estado.

El Covid-19 sigue avanzando en las villas de Capital

El total de contagiados de coronavirus en las villas de la Capital ya llega a 1.410. Esto representa el 34% de los casos totales de la Ciudad, pero en el aumento diario de los últimos días representa más del 50%. Los barrios más afectados son la Villa 31 (con 966 casos), la 1-11-14 (con 373) y la 21-24 (con 42).

En este último caso, recién el lunes 18 comenzaron a realizarse operativos de testeo. Es lo que sucedió también en la 31 y en la 1-11-14, donde los gobiernos nacional y porteño empezaron con el operativo cuando la situación ya era crítica y demostraron que la "baja" cantidad de casos se debía al bajo número de testeos. Ahora siguen siendo insuficientes, ya que en varios casos no se le hizo

el hisopado a quienes conviven con personas que dieron positivo. Según informes oficiales, en la Villa 31 solo fueron testeadas 984 personas de las más de 40.000 que viven en el barrio, y el índice de positivos es del 60%.

Las condiciones habitacionales en los barrios siguen siendo terribles. El fallecimiento de Ramona Medina, militante social de la Villa 31, que había denunciado no haber tenido agua durante doce días, demuestra la responsabilidad del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y del gobierno nacional que maneja Aysa. El funcionario porteño a cargo de la urbanización del barrio, Diego Fernández, declaró que las instalaciones de agua allí son mejores que las de cualquier otra villa de



la Ciudad. Es una declaración autoincriminatoria, que refleja las condiciones de insalubridad a las que condenan a miles de familias. Durante todo el último fin de semana, la Villa 1-11-14 sufrió un corte generalizado que dejó sin agua a más de diez manzanas.

Los contagios de coronavirus siguen aumentando, favorecido por el hacinamiento y la miseria. El gobierno no realiza operativos de desinfección en los pasillos ni dentro de los comedores populares (que no dan abasto a la demanda cada vez mayor), ni atien-

de el reclamo por la provisión de kits de higiene para las familias -cada vez con menor acceso a esos productos por el aumento de los precios.

Es en este cuadro que el Polo Obrero y el Frente de Lucha Piquetero se volvieron a movilizar por todos los reclamos. Como plantea el proyecto de ley presentado por la banca del Partido Obrero en el Frente de Izquierda en la Legislatura porteña, reclamamos la aplicación de un protocolo especial en las barriadas que incluya testeos masivos, pro-

visión de agua las 24 horas, desinfección de lugares comunes, reparto de kits de higiene, subsidio alimentario y económico, que se garanticen viviendas en condiciones para quienes tengan que realizar el aislamiento, entre otros puntos.

El gobierno debe responder de manera urgente a estos reclamos y rendir cuentas frente a las organizaciones, vecinos y trabajadores de la salud sobre cómo llevará adelante estas medidas.

Iván B.F.

Nueva ola de contagios de coronavirus en los hospitales porteños

En los últimos días asistimos a una nueva ola de contagios de Covid-19 en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.

En el Rocca se cerró el primer piso de internación ante el contagio de una enfermera contratada recientemente y con un segundo trabajo en el sector privado. En el Udaondo, una residente y un camillero se contagiaron de una paciente porque no se activó el protocolo necesario (no fue testeada, pese a presentar síntomas sospechosos); sus compañeros fueron forzados a seguir trabajando, con amenazas de sanciones y descuentos.

A su turno, en el Durand se contagiaron tres enfermeros y tres médicos ante una alta demanda de atención y fallas en las condiciones de bioseguridad. Y en el Fernández se registraron dos contagios en médicos, y sus trabajadores denuncian falta de espacio, ventilación y medidas preventivas.

Como se ve, la precarización laboral y la desidia gubernamental son los principales factores de riesgo entre los profesionales de la salud. El pluriempleo, la falta o el



defecto de los protocolos, las precarias condiciones de bioseguridad, el hacinamiento, entre otros temas, siguen causando contagios entre los trabajadores de la salud como hace un mes y medio atrás.

El tiempo transcurrido no fue utilizado para preparar adecuadamente al sistema sanitario y permitió, en cambio, el avance del virus y que tienda a concentrarse en los barrios populares. La cuarentena fue el principal recurso al que apeló el gobierno para contener el

alza de los contagios y ahora el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, la flexibilizó, permitiendo el funcionamiento de casi toda la actividad comercial, mientras la curva pega un salto.

Frente a los nuevos casos de contagios en profesionales, no tardaron en aparecer quienes buscan responsabilizarlos: TN (16/5), por ejemplo, sostiene que los médicos del Fernández se habrían contagiado por compartir un almuerzo sin tapabocas. No innovan: hace

un mes atrás, el ministro de Salud nacional, Ginés González García, hablaba de contagios de contacto horizontal y pedía a los profesionales ser menos omnipotentes. Para ese entonces, el gobierno de Larreta perseguía trabajadores del Hospital Moyano con la ley de procedimientos administrativos de la Ciudad, por denunciar la falta de Equipos de Protección Personal. Varias direcciones hospitalarias siguieron ese camino. El guión oficial de "se contagian en-

tre ellos" reaparece ahora como una farsa, mientras el salto de los contagios en las barriadas pone a los hospitales públicos bajo una amenaza de colapso.

Este cuadro requiere medidas de fondo para proteger a los trabajadores de la salud y garantizar la atención sanitaria. Ante la proximidad del pico de casos y su concentración en las villas de la Ciudad es necesario disponer de todos los recursos del sistema de salud (público, privado, obras sociales) en un comando único estatal con control de sus trabajadores. Junto con un aumento salarial de emergencia, esta medida posibilitaría terminar con el pluriempleo y las extenuantes jornadas laborales que exponen a los trabajadores, a la vez de posibilitar una mayor rotación del personal.

En esta perspectiva, residentes y concurrentes preparan medidas de lucha. En Enfermería está planteado relanzar la pelea por el pase a la carrera profesional. Ante una nueva ola de contagios, organicemos una nueva ola de luchas de los trabajadores de la salud.

Gustavo Cala

Asamblea de mujeres y disidencias discute acciones de lucha

Hacia el 28M y 3J. El 21 marchamos al Ministerio de las Mujeres

El pasado sábado se reunió la primera asamblea de mujeres y disidencias, convocada por organizaciones de izquierda, ante la deserción de los sectores kirchneristas que en el pasado organizaban estas jornadas.

La asamblea reunió a un centenar de compañeras con la premisa de que “la lucha de las mujeres no está en cuarentena” y la voluntad de organizar jornadas de lucha por nuestros derechos hacia el 28 de mayo -Día de Acción Mundial por la Salud de las mujeres y emblema de la lucha por el derecho al aborto legal- y el próximo 3 de junio, la fecha del #NiUnaMenos y de denuncia del Estado responsable.

Tras una larga deliberación, acordamos realizar una primera acción de lucha callejera el próximo jueves 21 de mayo, a las 17 horas, frente al Ministerio de las Mujeres, con las consignas “No al pago de la deuda”, “Presupuesto para las mujeres y disidencias” y “Aborto legal ya”. Junto con ello nos pronunciamos en apoyo a distintas acciones que tendrán lugar esta semana, como ollas populares en los barrios y la movilización de la gremial Ademys en defensa de las y los docentes el próximo viernes frente a la Legislatura porteña.



La grave situación que atravesamos las mujeres y las disidencias atravesó múltiples intervenciones. En estas se denunció la política del gobierno de Alberto Fernández, que tiene como prioridad el pago de la usuraria deuda externa (reforzando el sometimiento nacional al FMI y al capital financiero), mientras no destina un peso a la atención de las mujeres, cuya exposición

a la violencia se ha agravado en el marco del confinamiento hogareño que impone la cuarentena. Tampoco destina los recursos necesarios al sistema sanitario en medio de una pandemia mundial y con un ranking escandaloso, en nuestro país, de trabajadoras y trabajadores de la salud contagiados.

Los despidos, la precarización laboral y los ataques al sa-

lario -avalados por la burocracia sindical y el Ministerio de Trabajo- son otro capítulo especial de los agravios que nos afectan a las mujeres trabajadoras, sobre quienes pesa “la responsabilidad” del cuidado familiar, en barrios sin agua potable y sin acceso a los alimentos. Las voces de las compañeras de los barrios, como las del Polo Obrero; de organizaciones sindicales

independientes, como Ademys, la Asociación Gremial Docente de la UBA y comisiones internas combativas, así como de las organizaciones independientes y de activistas de esta lucha, fueron categóricas para describir lo que las organizaciones integradas al gobierno quieren ocultar: la pandemia de la violencia contra las mujeres.

A la luz de esta realidad, el rechazo al pronunciamiento de funcionarias en apoyo al pago de la deuda en nombre del “feminismo” fue contundente.

De igual manera, nos pronunciamos por reforzar el reclamo por la urgente aprobación del derecho al aborto legal, que el gobierno quiere mandar a cuarentena, no se sabe hasta cuándo.

La convocatoria a organizarnos ha resultado un acierto. Vamos por una nueva asamblea el próximo sábado. Las compañeras del Plenario de Trabajadoras propondremos nuevas acciones que preparen una movilización el 3 de junio hacia Plaza de Mayo, reclamando que no hay Ni Una Menos con hambre, despidos, salarios de miseria, aborto clandestino y desprotección de las mujeres.

Juliana Cabrera

INTERNACIONALES

Facebook Live: el movimiento obrero internacional frente a la pandemia y la crisis

Sábado 23, con secretarios generales y referentes de sindicatos de Argentina, Perú, Brasil y Francia

El sábado 23 desarrollaremos un importante Facebook Live con la presencia de Jorge Juárez, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP); Robson Silva, director jurídico de la Federación Nacional de Trabajadores de Correos (Fentect) de Brasil y presidente del sindicato de Trabajadores de Correos de Minas Gerais (Sintect-MG), además de dirigente de Luta Pelo Socialismo (LPS); Maria Pereira, militante de la CGT Correos de París 11 y dirigente de la organización L'Etincelle de Francia (La Chispa), y Alejandro Crespo, secreta-

rio general del Sindicato Unico de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) y dirigente de la Coordinadora Sindical Clasista-PO. Estará coordinado por Ileana Celotto, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) y también dirigente de la CSC-PO.

Este representativo panel abordará las luchas y problemas que enfrenta el movimiento obrero en el cuadro de pandemia y bancarrota capitalista, así como la batalla por abrir una salida independiente de los trabajadores frente a la crisis.

El horario del evento es las 14

horas de Argentina, las 14 hs de Brasil, las 12 hs de Perú y las 19 hs de Francia.

Será el tercer Facebook Live internacional impulsado desde el PO, antecedido por uno sobre América Latina, junto a compañeros de la Fuerza 18 de Octubre chilena, el Grupo Vilcapaza peruano y Luta Pelo Socialismo de Brasil, y otro sobre la lucha del movimiento de mujeres en la región, con compañeras de la LPS de Brasil y Rosas Rojas (Grupo de Acción Revolucionaria) de México.

Te invitamos y te llamamos a difundir el evento.

Redacción

Facebook LIVE
Sábado 23 de mayo
 Argentina-Brasil: 14hs.
 Perú: 12hs.
 Francia: 19hs.

El movimiento obrero frente a la pandemia y la crisis

Alejandro Crespo (Argentina)
Jorge Juárez (Perú)
Robson Silva (Brasil)
Maria Pereira (Francia)

COORDINA
Ileana Celotto (Argentina)

CONECTATE VIA
 /participacion

CSC COORDINACION SINDICAL CLASISTA

Internacional Progresista, al rescate del capitalismo

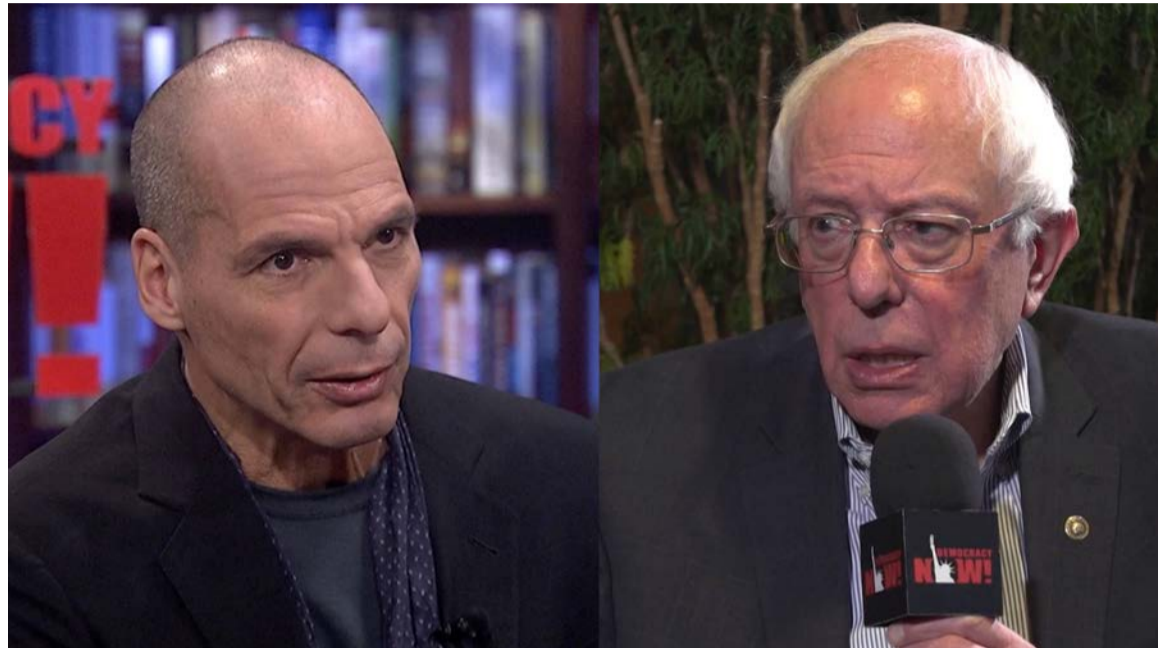
DíEM25, Frente Europeo de Desobediencia Realista, un movimiento democrático paneuropeo transfronterizo, liderado por Yanis Varoufakis, ex ministro de Economía griego, cuando Syriza llegó al gobierno, y el Instituto Sanders, fundado en 2017 por Jane Sanders, esposa del senador demócrata Bernie Sanders, acaban de dar a luz la "Internacional Progresista", una organización avalada por más de 40 intelectuales de todo el mundo, entre los que destacan Noam Chomsky y Naomi Klein, y dirigentes políticos, como Katrín Jakobsdóttir, del Movimiento de Izquierda-Verde y actual primera ministra de Islandia, en cuya capital, Reikiavik, está previsto realizar un primer Congreso del flamante nucleamiento.

El grupo Puebla, en su reciente encuentro virtual, que congregó a lo más graneado del progresismo latinoamericano, saludó y decidió sumarse a la iniciativa.

La nueva organización advierte que "hay una guerra global en marcha contra los trabajadores, contra el medio ambiente, contra la democracia, contra la decencia", plantea unir las fuerzas progresistas ante "el avance del autoritarismo". Y llama a defender y sostener "un Estado de bienestar, los derechos laborales y la cooperación entre países, además de consolidar un mundo más democrático, igualitario, ecologista, pacífico post-capitalista, próspero y pluralista, y en el que prime la economía colaborativa".

Si hay un común denominador en lo que se refiere a este arco tan variado del progresismo mundial es que están lejos de haber logrado promover un rumbo superador respecto de la política neoliberal en la experiencia política que les tocó protagonizar en sus respectivos países. Tampoco lo están haciendo ahora. En la actualidad, tenemos a Bernie Sanders, luego de su frustrada carrera presidencial, llamando a cerrar filas en el Partido Demócrata y promoviendo la candidatura de Joe Biden. Se trata de un callejón sin salida para los millares de trabajadores y jóvenes que abrazaron la postulación del senador socialdemócrata.

Lejos de representar una transformación del régimen político y social, el progresismo no saca los pies del plato. Un ejemplo muy elocuente es el de Islan-



El exministro de economía griego, Yanis Varoufakis, y el senador norteamericano Bernie Sanders

dia, donde el Partido Verde de la primera ministra gobierna el país en coalición con el partido conservador de centro-derecha, que se ha reservado para sí ministerios estratégicos. La centro-derecha estuvo en el poder hasta 2017, cuyo gobierno estalló en medio de una gigantesca crisis política, cuando se revelaron actos de corrupción que comprometían al entonces primer ministro. El progresismo ha terminado salvando el sistema político y reconstruyendo la gobernabilidad a través de un pacto con los representantes tradicionales del neoliberalismo.

No se puede perder de vista la conducta de Varoufakis de la coalición Syriza, cuyo gobierno capituló ante los dictados de la Unión Europea y su memorándum de ajuste, violentando el mandato popular que rechazó las imposiciones que planteaba la troika. El dirigente griego hoy se arrepiente de esta postura y señala que lo correcto hubiera sido abandonar la UE. ¿Pero cuál sería la salida superadora? Recordemos que Varoufakis en el apogeo de Syriza señaló que la crisis capitalista "no era el mejor ambiente para políticas socialistas radicales. Apuntó que "no estamos preparados para superar el colapso del capitalismo europeo con un sistema socialista que funcione".

El ex ministro de Syriza no ha abandonado esta premisa. El cambio que propone consiste en suplantar su antiguo europeísmo por una variante nacionalista con mayor intervención del Estado, pero siempre en el marco del orden social vigente. Pero el

estatismo burgués no es más que una tentativa extrema de rescate del capital, que ha ido siempre acompañado de un ataque en regla contra los trabajadores. Por lo pronto, un retorno al dracma traería aparejado un severo golpe a los salarios, que quedarían nominados en la moneda local depreciada frente al euro, en tanto que las deudas seguirían fijadas en la divisa europea, haciendo todavía más gravosa la hipoteca que pesa sobre el país.

¿Poscapitalismo?

La Internacional Progresista habla de "postcapitalismo", de modo de escabullir el bulto. Desterrada la perspectiva del socialismo que excluyen, la salida que se ofrece, aunque se lo pretenda disimular, no es otra que el viejo plato recalentado de la sociedad capitalista, la cual podría regenerarse, según su punto de vista, adaptando formas de mayor equidad social y de democracia política. Se trata de un capitalismo imaginario, pues el capitalismo real, no el que surge de sus cabezas, viene descargando el peso de sus crisis y bancarrota sobre las masas.

En oposición al neoliberalismo, la receta que proclaman los promotores de esta iniciativa sería una mayor intervención del Estado. Pero hacen la prevención de que "el tema es si el Estado se utiliza para rescatar al neoliberalismo o para llevar adelante una reforma". Se presenta como si el Estado fuera una entidad en disputa, por encima de la organización social, cuando es un engranaje e instrumento central del régimen capitalista, que actúa

bajo la tutela de la clase dirigente y constituye una maquinaria que oficia de correa de transmisión y vehículo de sus intereses.

Grupo Puebla

La Internacional Progresista ha recibido el apoyo del Grupo Puebla, que reúne a los representantes más prominentes del progresismo latinoamericano. Pero no se puede soslayar el hecho de que estas fuerzas políticas han pasado por ser gobierno y conducido el destino de sus países durante décadas. El balance de esta experiencia revela su incapacidad para sacar al país del atraso, la dependencia y la opresión imperialista. Los gobiernos progresistas latinoamericanos han puesto en marcha importantes planes de asistencia social, lo cual ha representado un alivio para la población en una situación desesperante, pero esto está distante de constituir una transformación social. La estructura social se ha mantenido intacta. Hasta la propia ayuda social se fue recortando mientras se procedía a ajustes severos, que dieron pie a protestas y grandes movilizaciones populares.

El progresismo latinoamericano ha sido incapaz de enfrentar al neoliberalismo. Ha tratado de salvar su pellejo, adaptándose a las exigencias del capital internacional y aplicando él mismo los ajustes, pero eso no ha sido suficiente para evitar su caída. Dilma Rousseff y luego Evo Morales fueron destituidos por golpes cívico-ecclesiástico-militares sin ofrecer resistencia ni convocar a la movilización popular.

El Grupo Puebla, en su corta existencia, ha demostrado sus límites para transformarse en una alternativa. Alberto Fernández, uno de los dos presidentes en ejercicio que integra dicho nucleamiento, permanece en el Grupo Lima, junto a sus pares derechistas de América Latina, que vienen conspirando activamente para tirar abajo a Nicolás Maduro. El gobierno argentino ha reconocido y dado las placas correspondientes al cuerpo diplomático nombrado por el gobierno golpista de Jeanine Añez. La política exterior de nuestro país ha estado subordinada al rescate de la deuda que se viene desarrollando en el marco de las negociaciones con los bonistas y el FMI, y que estaría en los umbrales de un arreglo.

Un dato distintivo del gobierno del mejicano López Obrador son las llamativas buenas migas con el autoritario Donald Trump. El presidente mejicano ha renovado el tratado de libre comercio a la medida de las exigencias de Estados Unidos y convirtió a su país en un estado tapón contra las caravanas migratorias que buscan un escape al hambre y a la pobreza que asolan el continente. El combate contra el narcotráfico ha sido utilizado como pantalla, una vez más, para reforzar el corrompido aparato militar y policial.

Conclusión

La búsqueda de un punto de equilibrio entre las necesidades populares y el orden social capitalista se ha revelado infundada. Si hay algo que se ha demostrado carecer de "realismo" es la pretensión de revertir las tendencias a la polarización social que se han acentuado como nunca. No existe una estación intermedia entre el neoliberalismo y la revolución social. El tren de la historia, de mano del capitalismo, nos conduce hacia un escenario de barbarie: de guerras y estragos ecológicos, sanitarios, sociales sin precedentes. El tren de la historia sólo puede ir para adelante y abrir un nuevo horizonte para la humanidad de la mano de una salida liderada por los trabajadores.

Pablo Heller

El texto completo se encuentra disponible en <https://prensaobrera.com/seccion/internacionales>